

APITUTADOS POLÍTICOS O SEGURIDAD CIUDADANA: ¿DÓNDE ESTÁN LAS PRIORIDADES DEL GOBIERNO?

El recorte presupuestario anunciado por el Gobierno, que afecta directamente a Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y aparentemente también a las Fuerzas Armadas, es una afrenta inadmisibile contra la seguridad de nuestro país. Como diputada no puedo dejar de manifestar mi más profundo rechazo a esta medida, que no sólo evidencia una desconexión absoluta del Ejecutivo con las prioridades reales de los chilenos, sino que además pone en riesgo la estabilidad y el orden público.

Hablemos claro: el problema no es la falta de recursos, sino el despilfarro y la ineficiencia que han caracterizado a este gobierno. En vez de destinar los fondos públicos a nuestras instituciones de seguridad, esenciales para combatir el crimen, el terrorismo y la inmigración ilegal, el oficialismo insiste en mantener una maquinaria estatal inflada, llena de apitutados políticos que no aportan nada al bienestar de nuestra nación. ¿Cuántos millones más vamos a seguir gastando en cargos de confianza creados solo para pagar favores políticos? ¿Cuánto tiempo más vamos a tolerar esta burla?

Es indignante que mientras miles de carabineros y efectivos de las Fuerzas Armadas arriesgan sus vidas en la calle, enfrentándose a bandas criminales y defendiendo nuestras fronteras, el gobierno les dé la espalda con recortes presupuestarios. Estos ajustes no sólo contravienen los compromisos adquiridos durante la discusión de la Ley de Presupuestos, sino que también reflejan una agenda ideológica que prioriza las redes clientelistas por sobre la seguridad de los ciudadanos. No necesitamos más operadores políticos; necesitamos más policías, más vehículos blindados, más equipamiento para nuestras tropas desplegadas en el norte y el sur.

El caso de las Fuerzas Armadas es igual de alarmante.



Por: Camila Flores,
diputada distrito 6

SOLICITADO

Se les exige operar en condiciones extremas, combatiendo el narcotráfico y el terrorismo en el sur, y controlando la crisis migratoria en el norte, pero al mismo tiempo se les quitan recursos esenciales para cumplir con estas tareas. Esto no es solo irresponsable; es una traición a la patria. ¿Cómo pretende el Gobierno garantizar el cumplimiento de los estados de excepción constitucional si les niega los medios necesarios para actuar?

Chile no puede seguir permitiendo que los apitutados políticos sigan parasitando los recursos públicos. Es hora de una auditoría seria y transparente que termine de raíz con esta cultura de amiguismos y pagos de favores. Es momento de sacar a los operadores políticos de las planillas del Estado y destinar esos recursos a las áreas que realmente importan: seguridad, salud y educación.

Le exijo al Gobierno que revierta de inmediato estos recortes y priorice los recursos para quienes realmente lo necesitan. Chile está enfrentando una crisis de seguridad sin precedentes, y los ciudadanos merecen un Ejecutivo que actúe con seriedad y compromiso, no uno que dilapide los fondos públicos en redes clientelistas. Nuestra nación merece respeto, y nuestras instituciones de seguridad merecen todo nuestro apoyo. No descansaremos hasta que cada peso del presupuesto se destine a construir un Chile más seguro y libre de apitutados.